

## 1.5. Obligaciones y contratos

# A vueltas con la interrupción de la prescripción vía reclamación extrajudicial en las acciones personales

## *Interruption of the prescription for out-of-court claims in personal actions*

por

JOSÉ MARÍA GARCÍA RODRÍGUEZ

*Abogado y profesor doctor de Mediación Civil y Mercantil  
en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).*

**RESUMEN:** El pasado 7 de octubre de 2015 entró en vigor la Ley 42/2015, la cual modificó el artículo 1964.2 del Código civil, reduciendo el plazo general de prescripción de las acciones personales de quince a cinco años. Esta modificación legal no debería tener mayor transcendencia jurídica, si no fuera porque la misma es aplicable aquellas obligaciones contractuales que, aun habiendo sido constituidas durante el régimen anterior de quince años, no se ha ejercitado ninguna acción por las mismas en los cinco años desde la entrada en vigor de la Ley 42/2015, es decir, antes del 7 de octubre de 2020, salvo que se haya interrumpido la prescripción en alguna de las formas establecidas en el artículo 1973 del Código civil. El presente artículo realiza una revisión jurisprudencial actualizada de los requisitos exigidos para que la reclamación extrajudicial del acreedor se considere un instrumento válido para interrumpir la prescripción de una acción personal.

**ABSTRACT:** On 7 October 2015 Law 42/2015 entered into force, amending article 1964 section 2 of the Civil Code and reducing the general prescription term for personal actions from fifteen to five years. This legal amendment should not have great legal relevance except because it is applicable to contractual obligations, which despite being originated during the previous 15 year regulation, have not been exercised during the 5 years following Law 42/2015 entry into force. That is, before 7 October 2020, unless prescription was interrupted by way of any of the means established by article 1973 of the Civil Code. This paper makes a fresh review of court decisions so that a creditor's out-of-court claim can be considered a valid instrument to interrupt personal actions prescription term.

**PALABRAS CLAVES:** Acción personal. Interrupción. Prescripción extintiva. Requerimiento extrajudicial.

**KEY WORDS:** Extinctive prescription. Interruption. Out-of-court claims. Personal action.

**SUMARIO:** I. IDEAS PRELIMINARES.—II. ÁMBITO DE APLICACIÓN.—III. CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA.—IV. CUESTIONES FORMALES DEL REQUERIMIENTO EXTRAJUDICIAL.—V. CUESTIONES DE CONTENIDO DEL REQUERIMIENTO EXTRAJUDICIAL.—VI. *DIES AD QUEM* Y ESTADO DE ALARMA.—VII. UN CASO PARTICULAR: LA MEDIACIÓN COMO MECANISMO EXTRAJUDICIAL DE INTERRUPTIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN.—VIII. CONCLUSIONES.—IX. ÍNDICE DE RESOLUCIONES CITADAS.—X. BIBLIOGRAFÍA.

## I. IDEAS PRELIMINARES

El pasado 6 de octubre de 2015, se publicó en el BOE la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. La disposición final primera de dicha ley reformó el artículo 1964.2 del Código civil, reduciendo el plazo para la prescripción de las acciones personales que no tengan un plazo especial de quince a cinco años.

Esta reforma ha provocado que el ejercicio de millones de derechos civiles pueda verse comprometido al haber prescrito el plazo para interponer las acciones correspondientes, ya que el artículo 1939 del mismo texto civil establece la regla de derecho transitorio para aquellas obligaciones civiles que nacieron con el anterior plazo prescriptivo, pero que son ejercitadas durante el nuevo régimen de cinco años.

La jurisprudencia ha sido clara (entre otras, cabe citar la STS de 20 de enero de 2020) al indicar que la prescripción se regirá por la Ley que estuviese vigente en el momento que se constituyó el derecho (es decir, quince años), salvo que hayan transcurrido los cinco años desde la entrada en vigor de la Ley 42/2015 sin haber interrumpido la acción, momento en el que se entenderá que la misma ha prescrito.

En otras palabras, y a partir del 7 de octubre de 2020 (plazo que ha sido ampliado hasta el 28 de diciembre de 2020, a causa de las normas aprobadas durante el estado de alarma, tal y como se explicará posteriormente), aquellas acciones personales que nacieron con el anterior régimen prescriptivo y que no han sido ejercitadas durante todo ese tiempo, estarán abocadas al fracaso procesal debido a que se entenderán las mismas prescritas.

Sin embargo, existe la posibilidad de que dicha prescripción haya quedado interrumpida y que el cómputo del plazo se haya vuelto a reanudar, si el acreedor utilizó, durante ese plazo de cinco años, alguno de los mecanismos previstos en el artículo 1973 del Código civil, que son: el ejercicio de la acción ante los Tribunales, la reclamación extrajudicial realizada al deudor y cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor.

En el presente artículo, nos vamos a centrar, únicamente, en el análisis de los requisitos jurisprudenciales exigidos para que se entienda interrumpida la prescripción cuando el acreedor ha utilizado el mecanismo de la reclamación extrajudicial realizada al deudor.

Por tanto, la utilidad de este artículo es proporcionar argumentos, tanto para justificar la interrupción de la prescripción, como para oponer la misma, en las reclamaciones extrajudiciales realizadas por el acreedor.

## II. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Antes de proseguir con el estudio objeto del presente artículo, cabe recordar que la interrupción de la prescripción prevista en el artículo 1973 del Código civil vía requerimiento extrajudicial es posible tanto en las relaciones civiles como en las mercantiles.

De esta manera, la jurisprudencia de nuestro Alto Tribunal es una unánime al considerar que la prescripción en los contratos mercantiles puede ser interrumpida vía requerimiento extrajudicial, a pesar de que expresamente no se indique en el párrafo primero del artículo 944 del Código de Comercio.

El razonamiento al que llega el Tribunal Supremo (y que se puede apreciar en diferentes Resoluciones como la STS de 20 de febrero de 2020, la STS de 7 de febrero de 2019, y la STS de 8 de octubre de 2009) es que el contenido del artículo 1973 del Código civil prevalece al haber derogado el contenido del párrafo primero del artículo 944 de la ley mercantil. Una derogación tácita y consistente, únicamente, en permitir la posibilidad de interrumpir también la prescripción extintiva de las acciones en las relaciones mercantiles a través del mecanismo de la reclamación extrajudicial, ya que el resto del contenido del artículo 944 de la ley mercantil sigue plenamente vigente, con las diferencias que ello conlleva respecto de las reclamaciones civiles (la no interrupción en caso de desistimiento de la acción judicial interpuesta, por caducidad de instancia, etc.).

Por tanto, ya sea en las relaciones civiles, ya sea en el ámbito mercantil, las acciones objeto de interposición pueden ser interrumpidas por medio del requerimiento extrajudicial realizado al deudor.

## III. CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA

La doctrina del Tribunal Supremo es unánime al considerar que la prescripción de las acciones tiene su origen en razones de seguridad jurídica, y no de estricta justicia, que, a su vez, viene justificada en la extinción de un derecho provocada por el abandono o inactividad de su titular (entre otras, la STS 2 de marzo de 2020).

Debido a que la institución de la prescripción extintiva supone la pérdida de un derecho, su aplicación por los tribunales debe ser cautelosa y restrictiva, no siendo apreciable de oficio —al contrario de lo que ocurre con la caducidad—, sino que puede ser alegada por el deudor, siempre que se den dos requisitos: el transcurso del plazo sin interrupciones y la oposición en legal forma (STS de 17 de julio de 2008). Y decimos puede, ya que cabe la renuncia a la prescripción por parte del deudor.

Es por ello que los tribunales deberán valorar la voluntad del acreedor afectado en orden a conservar su derecho objeto de extinción, para lo que se le exigirá que demuestre que manifestó su «animus conservandi» de forma clara, fehaciente y en tiempo. Asimismo, los tribunales también analizarán si la excepción de la prescripción planteada por el deudor ha sido opuesta en tiempo y forma, y no existe ningún acto por el que se deba entender que ha renunciado, expresa o tácitamente, a la misma.

Por último, solo añadir que es reiterada la jurisprudencia que considera que la interrupción de la prescripción es una cuestión de hecho, y como tal, su existencia o inexistencia solo es competencia de los juzgados de instancia (STS de

21 de julio de 2008), debiendo ser analizada como una excepción de fondo que se deberá esclarecer a lo largo del proceso (PÁRAMO, 2017, 154).

#### IV. CUESTIONES FORMALES DEL REQUERIMIENTO EXTRAJUDICIAL

Partiendo de estas consideraciones acerca de la institución de la prescripción extintiva, se debe señalar que la doctrina jurisprudencial es unánime al considerar que el artículo 1973 del Código civil no exige ningún requisito formal para la reclamación extrajudicial, como mecanismo para interrumpir la prescripción.

Por tanto, y en líneas generales, se puede afirmar que hay libertad de forma a la hora de realizar la reclamación extrajudicial.

Sin embargo, esta aparente libertad se puede tornar en un auténtico quebradero de cabeza, tanto para el acreedor como para el deudor, ya que puede plantear problemas de prueba —de la existencia o no de la reclamación y de su fecha— en un procedimiento judicial, debiéndose resolver dichas cuestiones fácticas, como ya se ha dicho, en las salas de instancia —lo que procesalmente puede plantear problemas de cara a ulteriores recursos—.

Para resolver las cuestiones probatorias de la validez del requerimiento efectuado por el acreedor, se pueden señalar una serie de presupuestos que, a lo largo de la historia jurisprudencial, han sido exigidos por el Tribunal Supremo para considerar si procede o no la interrupción de la prescripción.

Entre ellos, cabe recordar (STS de 10 de enero de 2011) que la exteriorización del «*animus conservandi*» del derecho del acreedor debe:

- Consistir en una manifestación inequívoca de reclamar el derecho.
- Realizarse a través de un medio hábil y de forma adecuada.
- Transcender del propio titular del derecho.
- Identificar claramente el derecho que se pretende conservar (no valdría, pues, una manifestación genérica).
- Identificar claramente la persona frente a la que se pretende hacer valer ese derecho.
- Llegar a conocimiento del deudor.

A partir de estos presupuestos mencionados, y centrándonos más en los medios utilizados que en la propia manifestación exteriorizada, la casuística es prolífica y variopinta, habiéndose admitido jurisprudencialmente, multitud de medios para interrumpir la prescripción.

A título ilustrativo, cabría señalar los siguientes instrumentos que fueron admitidos por nuestros tribunales como medios hábiles:

- Telegramas (STS de 2 de marzo de 2020).
- Carta certificada sin acuse de recibo y sin acreditación de su contenido (STS de 5 de febrero de 2019 —se admite este medio porque previamente constaban acreditadas la recepción de otras cartas con acuse de recibo y justificante de texto, las cuales fueron admitidas por el deudor, salvo la última que no tenía acuse de recibo, pero la cual no constaba devuelta).
- Meras cartas reclamando daños (STS de 11 de marzo de 2004).
- Conversaciones reconocidas entre los abogados de los litigantes en búsqueda de un acuerdo entre las partes (STS de 10 de marzo de 1983 y STS de 21 de julio de 2008).

- Reclamaciones efectuadas a través de un tercero, ya sea mandatario verbal (STS de 18 de enero de 1968 —abogado que realiza reclamación «en nombre de mis clientes»—) o con poder (STS de 27 de junio de 1969).
- Reclamación efectuada a un deudor y por este llegan a los otros deudores (STS de 22 de junio de 2020 —la reclamación solo se efectúa al promotor, pero este la pone en conocimiento del arquitecto y aparejador, quienes se dan por enterados de la misma personándose en la vivienda para observar los desperfectos denunciados por los propietarios del inmueble—).
- Intercambio de correspondencia de cartas (STS de 2 de noviembre de 2005).
- Burofax (STS de 1 de abril de 2015).

La admisión jurisprudencial de esta variedad de medios, como mecanismos para interrumpir la prescripción, vendría justificada porque no solo es necesaria la actuación del acreedor tendente a la exteriorización del «animus conservadi», sino que también es necesario probar que el deudor ha conocido la voluntad del acreedor de querer conservar el derecho concreto que le ha reclamado.

Por tanto, la acreditación de la recepción del medio utilizado por parte del deudor importa tanto como el medio en sí mismo considerado. O, dicho de otra manera, da igual el medio que se utilice siempre que se pruebe que la manifestación del acreedor de conservar su derecho ha llegado a conocimiento del deudor.

Es por ello que la doctrina del Tribunal Supremo ha admitido, por ejemplo, las simples cartas, en las que no existía fehaciencia de su contenido ni de su recepción, porque las mismas habían sido reconocidas por los deudores.

O, incluso, cuando estas comunicaciones se han hecho indirectamente, como ocurrió en la STS de 22 de junio de 2020, en la que el burofax es dirigido al promotor-responsable de la construcción, pero este se lo comunica al aparejador y al arquitecto, los cuales se personan en el inmueble para subsanar el problema constructivo. Estos actos dan muestra de que tenían conocimiento de la reclamación realizada por los propietarios, interrumpiendo la prescripción de su responsabilidad por los daños de la obra realizada.

Pero que la reclamación extrajudicial tenga naturaleza receptiva no implica que sea necesario que el deudor llegue a tener efectivamente conocimiento de la reclamación, siendo suficiente, para interrumpir la prescripción extintiva, su simple recepción.

Por esta razón, el Tribunal Supremo ha considerado probada la interrupción de la prescripción en aquellos casos en los que el requerimiento se ha dirigido al domicilio del destinatario, pero este no los ha recogido (STS de 2 de marzo de 2020).

Por último, y los efectos del cómputo del plazo, cabe recordar que la interrupción se produce desde la fecha de emisión de la reclamación y no desde la fecha de su recepción (STS 2 de marzo de 2020), y que en las acciones personales, rige la teoría de la insatisfacción o de la pretensión insatisfecha (BELTRÁ, 2017, 43), por lo que el tiempo de la prescripción debe computarse desde el momento en que el crédito reclamado quedó insatisfecho (STS de 26 de mayo de 2014).

## V. CUESTIONES DE CONTENIDO DEL REQUERIMIENTO EXTRAJUDICIAL

Al margen de la casuística señalada en cuanto a los medios hábiles admitidos jurisprudencialmente, el acreedor que realice el requerimiento extrajudicial deberá atender a unos requisitos de contenido a la hora de identificar claramente el derecho que se pretende conservar, no valiendo la simple exteriorización de

la existencia de un derecho, sino que es necesario manifestar la intención de reclamar ese derecho a la persona obligada (STS de 6 de diciembre de 1969).

De esta manera, el acreedor que pretenda conservar su derecho por la vía analizada deberá, con claridad: a) precisar el derecho que está reclamando, identificando el origen del mismo, y; b) dirigirse a los deudores contra quienes reclama su derecho (STS de 10 de marzo de 1983 y STS de 1 de abril de 2015).

Es por ello que si el acreedor no puede acreditar que concretó el derecho que reclamaba en el contenido de su reclamación, lo más probable, es que los tribunales consideren que la prescripción no ha quedado interrumpida (STS de 27 de septiembre de 2007).

Un ejemplo ilustrativo de la necesidad de concreción y claridad a la hora de reclamar extrajudicialmente un derecho es la STS de 6 de febrero de 2007, en la que el tribunal rechazó la interrupción de la prescripción porque en la carta dirigida por el acreedor al deudor únicamente manifestó su deseo de llegar a un acuerdo que estimaba en una cifra global, pero sin precisar a qué derechos concretos hacía referencia (*i.e.* el reintegro de dos letras de cambio indebidamente cargadas en su cuenta corriente).

## VI. *DIES AD QUEM* Y ESTADO DE ALARMA

Inicialmente, el plazo final en el cómputo del plazo prescriptivo era el 7 de octubre de 2020, es decir, cinco años después desde la entrada en vigor de la Ley 42/2015.

No obstante, y en opinión de algunos autores (ANDRADES, 2021, 1629), este plazo se habría visto ampliado en 82 días naturales debido a dos normas aprobadas durante los estados de alarma.

En concreto, se está haciendo referencia a: a) la disposición adicional cuarta del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, la cual declaró la suspensión de los plazos de prescripción de cualquier acción y derecho mientras que el estado de alarma, o sus sucesivas prórrogas, estuviesen vigentes, y; b) el artículo 10 del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, en el que se estableció alzar la suspensión de los plazos de prescripción desde el 4 de junio de 2020.

De esta manera, la mencionada doctrina (ANDRADES, 2021, 1629) considera que, tras el alzamiento de la suspensión de los plazos prescriptivos, deben sumarse todos los días naturales que duró la suspensión (desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 3 de junio de 2020) al plazo final del cómputo de la prescripción inicialmente fijado.

A los efectos de este artículo, habría que contar 82 días naturales más al plazo final del 7 de octubre de 2020, lo que daría un nuevo *dies ad quem* prescriptivo fijado en el 28 de diciembre de 2020 (MARTÍN, 2020).

Por tanto, las acciones personales que nacieron con el anterior régimen prescriptivo de 15 años deberán haber sido ejercitadas (o interrumpidas) antes del 28 de diciembre de 2020 para no considerarse prescritas.

## VII. UN CASO PARTICULAR: LA MEDIACIÓN COMO MECANISMO EXTRAJUDICIAL DE INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN

Desde la entrada en vigor de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, es posible interrumpir extrajudicialmente la prescripción de las acciones con la solicitud de inicio de la mediación.

Para ello, el acreedor deberá solicitar el inicio de la mediación, quedando interrumpida la prescripción desde la fecha de recepción de la misma por el mediador.

Asimismo, los plazos volverán a reanudarse si transcurridos quince días naturales a contar desde la recepción de dicha solicitud no se firmara el acta de la sesión constitutiva o, si se desiste de la mediación (*e.g.* en caso de inasistencia injustificada por uno de los mediadores —habitualmente el que ha sido llamado por la parte solicitante, que lo lógico es que sea el deudor—).

Planteada en estos términos la mediación, se puede considerar la misma como un nuevo medio hábil para interrumpir extrajudicialmente la prescripción.

Ahora bien, este nuevo mecanismo al servicio del acreedor debe ser sometido a los mismos requisitos que los tribunales han exigido para otros medios de requerimiento.

Formalmente, la mediación no plantea ningún inconveniente como medio hábil para interrumpir extrajudicialmente la prescripción, ya que se cumpliría con los requisitos exigidos, como es la constancia de que el deudor ha recibido la reclamación del acreedor en forma de intento de mediación.

Sin embargo, y en mi opinión, considero que podría surgir algún problema con el contenido de la reclamación a la hora de identificar clara y concretamente el derecho que el acreedor-solicitante quiere conservar, siendo el problema más de índole práctico que teórico, ya que tanto en la solicitud como en la convocatoria a la mediación, acreedor y mediador deberán reflejar, con meridiana claridad, a qué derecho se está haciendo referencia y qué se quiere solucionar a través de este mecanismo de resolución de conflicto, ya que en caso contrario, los tribunales podrían cuestionar la validez de la interrupción de prescripción a través de la mediación.

De esta manera, y teniendo presente lo sucedido en la STS de 6 de febrero de 2007, si en la solicitud de inicio de la mediación o en la convocatoria, se indicase alguna frase de tipo genérico «acuerdo sobre deudas pendientes» o algo similar, y posteriormente el deudor convocado, no acudiese a la mediación, podría defenderse, en sede judicial, que la solicitud de mediación no habría interrumpido la prescripción extintiva al no haberse identificado claramente el derecho que se pretendía conservar.

Es por ello que para evitar este tipo de problemas, tanto la solicitud de inicio de mediación como la convocatoria a la misma deberán cumplir los requisitos de contenido que se han mencionado en el epígrafe V.

Por otro lado, y si la solicitud de inicio de la mediación fuese realizada por el deudor —para reclamar el cumplimiento del derecho objeto de conservación— o si el deudor asistiese a la mediación convocada por el acreedor, estos actos podrían ser interpretados en un procedimiento judicial como la renuncia a la prescripción, no pudiendo ser opuesta esta excepción por el deudor, lo que a la postre, supondría la interrupción de la misma.

Para llegar a esta conclusión, bastaría con aplicar, vía analogía, el mismo criterio que tuvo la STS de 17 de julio de 2008 en la que fue desestimada la prescripción alegada por el deudor, ya que este había requerido notarialmente al acreedor para comunicarle la resolución del contrato. Este requerimiento fue interpretado por el Tribunal Supremo como el reconocimiento implícito del derecho del acreedor y, por ende, la renuncia tácita a la prescripción, lo que podría ocurrir en caso que el deudor solicitase el inicio de una mediación sobre el mismo derecho del que luego alegase estar prescrito.



## VIII. CONCLUSIONES

I. Después de la revisión jurisprudencial realizada, se puede apreciar que la interrupción de la prescripción vía requerimiento extrajudicial puede ser realizada por innumerables medios, los cuales pueden ser admitidos en sede judicial siempre que se demuestre que el deudor recibió el requerimiento.

Por lo que más que un problema de forma será de prueba, ya que dependiendo del medio utilizado, será más fácil —o menos— demostrar la constancia de su recepción por parte del deudor, la fecha de su recepción y el contenido de la reclamación.

II. Pero, además, de importar el medio elegido para realizar dicha reclamación, es importante el contenido de la misma, ya que el acreedor deberá ser claro a la hora de identificar el derecho concreto que está reclamando de cara a conservar el mismo y que no se entienda prescrita la acción.

Por tanto, un requerimiento extrajudicial deberá reunir una serie de requisitos formales y de contenido para poder interrumpir la prescripción, ya que en caso contrario, se entenderá extinguido el derecho.

III. Al hilo de estas cuestiones, se ha analizado la solicitud de inicio de la mediación como mecanismo de reclamación extrajudicial para interrumpir la prescripción, concluyendo que, si bien es cierto que formalmente no presenta ningún problema, su contenido puede plantear algún inconveniente, debido a que no se exprese con claridad el derecho objeto de conservación por parte del deudor.

Por lo que si se quiere utilizar la mediación para interrumpir la prescripción, tanto el acreedor como el mediador —como potencial responsable de una posible reclamación por parte del acreedor por no haber convocado correctamente al deudor y haber sido estimada la prescripción— deberán ser meticulosos a la hora de definir el objeto del conflicto que se deberá indicar en la solicitud y/o en la convocatoria.

IV. Como se puede apreciar, la reclamación extrajudicial como instrumento para interrumpir la prescripción es un mecanismo válido pero no exento de suspicacias, que en un proceso judicial podrán ser alegadas, tanto por la parte actora como la demandada, con el fin de hacer valer o no la prescripción.

Parece sensato pensar que en los próximos meses, los tribunales tengan que pronunciarse sobre estas cuestiones aquí analizadas, a la vista de que muchos acreedores interpusieron reclamaciones extrajudiciales para interrumpir la prescripción y así seguir disponiendo del plazo de quince años del régimen anterior. La cuestión a esclarecer es si será válida o no dicha interrupción realizada.

## IX. ÍNDICE DE RESOLUCIONES CITADAS

### SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO

- STS núm. 331/2020, Sala de lo Civil, Sección 1ª, de 22 de junio de 2020 (ROJ: STS 1999/2020 - ECLI:ES:TS:2020:1999). Recuperado el 14 de junio de 2021.
- STS núm. 142/2020, Sala de lo Civil, Sección 1ª, de 2 de marzo de 2020 (Roj: STS 702/2020 - ECLI:ES:TS:2020:702). Recuperado el 14 de junio de 2021.
- STS núm. 119/2020, Sala de lo Civil, Sección 1ª, de 20 de febrero de 2020 (STS 502/2020 - ECLI:ES:TS:2020:502). Recuperado el 14 de junio de 2021.



- STS núm. 29/2020, Sala de lo Civil, Sección 1ª, de 20 de enero de 2020 (Roj: STS 21/2020 - ECLI:ES:TS:2020:21). Recuperado el 14 de junio de 2021.
- STS núm. 79/2019, Sala de lo Civil, Sección 1ª, de 7 de febrero de 2019 (STS 339/2019 - ECLI:ES:TS:2019:339). Recuperado el 14 de junio de 2021.
- STS núm. 74/2019, Sala de lo Civil, Sección 1ª, de 5 de febrero de 2019 (Roj: STS 342/2019 - ECLI:ES:TS:2019:342). Recuperado el 14 de junio de 2021.
- STS núm. 163/2015, Sala de lo Civil, Sección 1ª, de 1 de abril de 2015 (ROJ: STS 2212/2015 - ECLI:ES:TS:2015:2212). Recuperado el 14 de junio de 2021.
- STS núm. 248/2014, Sala de lo Civil, Sección 1ª, de 26 de mayo de 2014 (Roj: STS 2036/2014 - ECLI:ES:TS:2014:2036). Recuperado el 14 de junio de 2021.
- STS núm. 972/2011, Sala de lo Civil, Sección 1ª, de 10 de enero de 2012 (Roj: STS 608/2012 - ECLI:ES:TS:2012:608). Recuperado el 14 de junio de 2021.
- STS núm. 630/2009, Sala de lo Civil, Sección 1ª, de 8 de octubre de 2009 (STS 5972/2009 - ECLI:ES:TS:2009:5972). Recuperado el 14 de junio de 2021.
- STS núm. 746/2008, Sala de lo Civil, Sección 1ª, de 21 de julio de 2008 (Roj: STS 4332/2008 - ECLI:ES:TS:2008:4332). Recuperado el 14 de junio de 2021.
- STS núm. 728/2008, Sala de lo Civil, Sección 1ª, de 17 de julio de 2008 (Roj: STS 3954/2008 - ECLI:ES:TS:2008:3954). Recuperado el 14 de junio de 2021.
- STS núm. 1037/2007, Sala de lo Civil, Sección 1ª, de 27 de septiembre de 2007 (ROJ: STS 5988/2007 - ECLI:ES:TS:2007:5988). Recuperado el 14 de junio de 2021.
- STS núm. 136/2007, Sala de lo Civil, Sección 1ª, de 6 de febrero de 2007 (ROJ: STS 433/2007 - ECLI:ES:TS:2007:433). Recuperado el 14 de junio de 2021.
- STS núm. 877/2005, Sala de lo Civil, Sección 1ª, de 2 de noviembre de 2005 (ROJ: STS 6676/2005 - ECLI:ES:TS:2005:6676). Recuperado el 14 de junio de 2021.
- STS núm. 172/2004, Sala de lo Civil, Sección 1ª, de 11 de marzo de 2004 (Roj: STS 1684/2004 - ECLI:ES:TS:2004:1684). Recuperado el 14 de junio de 2021.
- STS, Sala de lo Civil, Sección 1ª, de 10 de marzo de 1983 (Roj: STS 64/1983 - ECLI:ES:TS:1983:64). Recuperado el 14 de junio de 2021.

## X. BIBLIOGRAFÍA

- ANDRADES, A. (2021): Suspensión de la prescripción adquisitiva durante la vigencia del estado de alarma. *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, núm. 785, 1607-1640.
- BELTRÁ, C. (2017): Comentario a la STS de 25 de enero de 2017. *Revista CEFLEGAL, Revista práctica de derecho*, núm. 196, 41-46.
- MARTÍN, A. (2020): Cómputo de plazos de prescripción y caducidad del Código civil después del Covid-19. *Revista Notarios y Registradores* [En línea], disponible en: <https://www.notariosyregistradores.com/web/utilidades/computo-plazos-prescripcion-y-caducidad-codigo-civil-tras-covid-19/>
- PÁRAMO, C. (2017): Prescripción extintiva de acciones. Interrupción por ejercicio de la acción; nulidad por falta de competencia objetiva. *Revista CEFLEGAL, Revista práctica de derecho*, núm. 192, 151-158.

BOE:

- Real Decreto de 22 de agosto de 1885 por el que se publica el Código de Comercio. Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1885-6627>. Recuperado el 14 de junio de 2021.
- Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código civil. Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763&p=20210605&tn=1#art1973>. Recuperado el 14 de junio de 2021.
- Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-9112>. Recuperado el 14 de junio de 2021.
- Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-10727>. Recuperado el 14 de junio de 2021.
- Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3692>. Recuperado el 14 de junio de 2021.
- Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5243>. Recuperado el 14 de junio de 2021.